

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por CARLOS HUMBERTO SIERRA MUÑETÓN en contra de BRILLADORA ESMERALDA LTDA (hoy liquidada) y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (**Radicado 05088-31-05-001-2016-00356-01**).

ANTECEDENTES

Pretende el demandante se declare la existencia de un contrato de trabajo en la modalidad a término indefinido, en el que Brilladora Esmeralda Ltda. fungió como empleadora, ejecutado entre el 03 de mayo de 2012 y el 30 de enero de 2013; y que al cumplir funciones de aseo y vigilancia, como auxiliar servicios generales, en una institución educativa del orden departamental, el Departamento de Antioquia es deudor solidario. En consecuencia, se condene a las demandadas a pagarle: el auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios, compensación de vacaciones, el *pago en pesos de las dotaciones regulares dejadas de pagar a razón de cien mil pesos* (sic), la indemnización por despido sin justa causa, subsidio de transporte, la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST, la indexación y las costas procesales.

Sustentó tales pedimentos relatando que celebró un contrato de obra o labor, con Brilladora Esmeralda Ltda., como auxiliar de servicios generales, en el que desempeñaba funciones de aseo y vigilancia, por lo que la naturaleza permanente de esa labor, hacía que la vinculación fuera a término indefinido. La relación laboral fue desarrollada, en los extremos temporales resaltados. El 30 de enero de 2013 le fue terminado el contrato sin justificación legal. La labor la desempeñó en la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta en el Municipio de Copacabana - Ant., centro que depende del Departamento de Antioquia. Su salario fue equivalente al SMLMV. Su empleadora no le pagó las obligaciones sociales reclamadas, no le suministró dotación ni subsidio de transporte.

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en su respuesta al libelo comentó que no fungió como empleador de la activa y por ello no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas en el escrito inicial. Aclaró que el servicio de aseo en las instituciones educativas, lo prestó un tercero a través de los *contratos de servicios de aseo y servicios generales* suscritos con su Secretaría de Educación (contratos 2012-SS-15-0047 y 2013-SS-15-0025). Dijo en cuanto a la responsabilidad que desea endilgársele, que el ente territorial funge como un mero administrador de los recursos que gira el Ministerio de Educación, según lo prevé el artículo 17 de la Ley 715 de 2001. De esa manera se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de integración del litisconsorcio necesario con la Nación - Ministerio de Educación nacional, ineptitud sustancial de la demanda, inexistencia de la obligación y prescripción.

El curador *ad-litem* de BRILLADORA ESMERALDA LTDA., en términos generales comentó que no le constan los hechos, aunque aceptó acorde a la documental obrante en el plenario la existencia del vínculo, los extremos temporales aducidos, el salario devengado y la suscripción de los contratos por prestación de servicios con el Departamento de Antioquia, con quien afirma existe la solidaridad deprecada. Propuso las excepciones de mérito que denominó: prescripción y falta de integración del litisconsorcio necesario con la aseguradora Cóndor S.A.

En sentencia del 24 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello (Antioquia), con base en la documental, declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo por obra o labor determinada entre el 03 de mayo de 2012 y el 30 de enero de 2013. ABSOLVIÓ a la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. (hoy liquidada) y al Departamento de Antioquia de las pretensiones promovidas en su contra por el actor en tanto DECLARÓ probada la excepción de prescripción por aducir que la reclamación efectuada a la parte empleadora no tuvo la entidad de interrumpir el término prescriptivo, por lo que al entenderse satisfecha la petición elevada a Brilladora Esmeralda Ltda. el 02 de febrero de 2016 cuando se dio la efectiva entrega por la empresa de mensajería, todos los emolumentos causados previo al 02 de febrero de 2013 se encuentran prescritos y atendiendo a que el vínculo terminó desde el 30 de enero de 2013 no encontró ningún rubro a adeudar de parte de la pasiva.

Esa determinación fue cuestionada a través del recurso vertical que promovió el polo activo de la Litis, aduciendo en síntesis que en el asunto no se configura el fenómeno de la prescripción en la forma decidida, en tanto considera que la reclamación efectuada el 18 de diciembre de 2013 (sic) al Departamento de Antioquia, afectó a Brilladora Esmeralda tratarse de obligaciones solidarias conforme lo dispone el artículo 34 del CST, por lo que la suspensión de la prescripción se dio hasta el 18 de diciembre de 2016 y la demanda se instauró el 15 de abril de 2016, teoría que ratifica acudiendo a la Ley 715 de 2011 en coherencia con el artículo 2540 del Código Civil enfatizando que aun con la liquidación de la sociedad empleadora las obligaciones persisten solidariamente a más que en virtud del artículo 94 del CGP que trae por analogía la demanda fue notificada al Departamento dentro del año subsiguiente. Señaló que acorde a lo que estipula el numeral 8° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 las acreencias adquiridas previo a la apertura de la liquidación judicial se interrumpe hasta tanto se produjera la adjudicación, lo que conforme al registro en Cámara de Comercio ocurrió en octubre de 2019.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado

CONSIDERACIONES

Conforme a lo que es materia de apelación, corresponde a la Sala determinar cómo problemas jurídicos: i) si los derechos laborales reclamados se encuentran afectados o no por la prescripción extintiva, ii) si dilucidado lo anterior, es viable imponer el reconocimiento de las acreencias laborales perseguidas con análisis de la solidaridad en cabeza del Departamento de Antioquia en atención a lo previsto en el artículo 34 del CST, y iii) si es procedente la indemnización por despido sin justa causa, y la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST.

Pues bien, para abordar la primera de las cuestiones, atendiendo a que el Juez de Instancia declaró probada de forma total la excepción de prescripción toda vez que, a su juicio, la reclamación presentada ante el ente territorial no tenía la virtud de interrumpirla al no haberse formulado a Brilladora Esmeralda Ltda. como verdadero empleador, debe definirse inicialmente si en el asunto opera como se definió, de manera total la excepción de prescripción formulada por la pasiva.

Al respecto, como primer punto debe decirse que a discreción de esta Sala de Decisión, el enunciado artículo 2540 del código civil de parte del recurrente que reza: *“La interrupción que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573, o que la obligación sea indivisible”*, da cabida a los efectos comunes que en contra de los demandados solidarios tiene la interrupción de la prescripción, pero ello surge posible en el ámbito civil, que aunque pudiera ser aplicable en nuestra especialidad en virtud a lo que predica el artículo 19 del CST, no se encuentra que haya una ausencia de norma exactamente aplicable al caso controvertido para dar paso a esa normativa ajena al compendio sustantivo laboral, mismo que en su artículo 34 predica la solidaridad que asume el beneficiario o dueño de la obra frente a sus contratistas, cuya responsabilidad es plausible en tanto se defina la obligación de todas aquellas deudas impagadas o pendientes a cargo del verdadero empleador que en este caso no queda duda, es Brilladora

Esmeralda Ltda., por lo que entender que la reclamación efectuada a quien no funge la condición de empleador es válida también ante el contratista, desdibuja las dos relaciones que se presentan, donde quien encarga la realización de la obra o la labor no lo une ningún vínculo con el trabajador empleado por el contratista, y contraría el sentido jurídico de esta figura, que no es otra que la de prever una garantía frente a los trabajadores, por lo que si no surge una obligación para el contratista, tampoco para el beneficiario de sus servicios (Ver SL3774-2021) y en igual sentido, si no se procedió con el reclamo escrito al patrono en los precisos términos del artículo 489 del CST, mal pudiera pregonarse que por efectuarse en un término más oportuno ante el deudor solidario, se trasladen los efectos de la interrupción de la prescripción al encargado directo de las acreencias bajo la teoría de que lo de un deudor se impone en el otro, por lo que bajo esa regulación no se excluye la prescripción extintiva.

Ahora, abordando el segundo de los postulados expuestos en el recurso, se tiene que para el 24 de febrero de 2014 cuando la empresa empleadora inició su proceso de liquidación (Pág. 22 Archivo 1), la prescripción de los créditos que estaban a su cargo, entre ellos los laborales que ahora se reclaman, se interrumpieron desde ese momento de apertura, lo que tiene por sustento el contenido del artículo 72 de la Ley 1116 de 2006 que predica: *“INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN E INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD. Desde el inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, y durante la ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación queda interrumpido el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso”*.

Y ello es así por cuanto habiéndose ejecutado la relación de tipo laboral que es objeto de este trámite con Brilladora Esmeralda entre el 03 de mayo de 2012 y el 30 de enero de 2013, cuya presentación de la demanda se dio el 15 de abril de 2016 (Pág. 20 Archivo 1) para cuando no se había dado la adjudicación y se encontraba en ejecución el proceso de liquidación, es visible la interrupción en los términos prescriptivos desde esa apertura del 24 de febrero de 2014, con lo que surge claro que ninguna de las acreencias pedidas

se encuentra afectada, lo que impulsa a que la decisión revisada sea revocada, para efectos de declarar no probada esta excepción propuesta por la pasiva y proceder con el estudio de cada uno de los estipendios perseguidos.

De ese modo, esta Sala de Decisión procede a determinar el valor de las **obligaciones sociales** que se predicaron insolutas por el actor, y cuyo pago no fue demostrado por la empleadora, para lo cual debe tenerse en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para los años 2012 y 2013, siendo preciso acotar que el auxilio de transporte institucionalizado a través de la Ley 15 de 1959, es procedente en el caso presente, en tanto la remuneración percibida equivale al SMLMV, y no se probaron las circunstancias en las que ha reparado la doctrina de esta especialidad para su improcedencia, tales como: que el trabajador resida en su lugar de trabajo, o el empresario suministre el transporte, sino que contrario a ello, lo demostrado en este escenario acorde a la declaración rendida por el testigo Camilo Alberto Arenas Arenas traído por el demandante al proceso, es que el señor Sierra Muñetón residía en el barrio Manrique de Medellín y la Institución Educativa de sus labores estaba ubicada en el Municipio de Copacabana - Antioquia, lo que se corrobora del ya mencionado certificado expedido por el rector de la institución (Pág. 38 Archivo 1), por lo que caminaba un trayecto de treinta minutos para abordar un bus de servicio público hasta ese Municipio, circunstancias que dan mérito a este auxilio, cuyo otorgamiento cumpliría su finalidad primigenia.

Así, a más de ser patente la deuda por auxilio de transporte que por el tiempo laborado en 2012 -238 días-, y 2013 - 30 días, asciende a \$537.880¹ y \$70.500², para un total de **\$608.380**, debe incluirse en el cálculo de las prestaciones sociales debidas.

¹ Auxilio de transporte para 2012 \$67.800 - Decreto 4963 de 2011)

² Auxilio de transporte para 2013 \$70.500 - Decreto 2739 de 2012)

Cesantías e intereses a la cesantía

Conforme a lo que predicen los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 en coherencia con la forma de liquidación que establece el artículo 253 del CST, y atendiendo a que la exigibilidad de este concepto se da solo a la terminación del contrato en virtud a su naturaleza y propósito, se realizan las operaciones del caso incluyendo el auxilio de transporte, arrojando para el año 2012 un saldo a pagar de \$419.475, y para el 2013 de \$55.000, siendo en total **\$474.475**.

Sobre los intereses a la cesantía, corresponde al demandante la suma de \$33.264 para 2012 y \$550 para 2013, de los que sumados se obtiene **\$33.319**.

Primas de servicio

En virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CST, modificado por el artículo 2° de la Ley 1788 de 2016, este rubro corresponde a 30 días por año, pagaderos, la mitad el 30 de junio y la otra mitad a más tardar el 20 de diciembre, el que teniendo como base el salario mínimo y el auxilio de transporte equivale a \$419.475 para 2012, y a \$55.000, para un total de **\$474.475**.

Vacaciones

Este emolumento se paga excepcionalmente con compensación en dinero, como cuando se da la terminación del contrato de trabajo y el empleado no alcanzó a disfrutar de este descanso remunerado como acontece en el de autos, y se calcula con base al último salario devengado excluyendo el auxilio de transporte por no ser considerada una prestación social, la que para este asunto corresponde a \$187.326 para 2012 y \$24.563, vacaciones que resultan en **\$211.889**, suma que habrá de ordenarse de manera indexada al momento del pago.

Indemnización moratoria artículo 65 CST

En lo que respecta a la imposición de la sanción prevista en el artículo 65 del CST, es pacífico que esta no opera de manera automática, sino que es el juzgador quien debe analizar y hacer juicios de valor razonables, sobre la conducta asumida por el empleador cuando omitió el pago o porque no se canceló a tiempo y dejó de consignar las acreencias que tenía a su cargo.

En este asunto, basta decir que de ningún medio se desprenden actuaciones de la empleadora Brilladora Esmeralda Ltda. (en proceso de liquidación), que justifiquen la ausencia en el pago de la liquidación final de las prestaciones sociales del promotor de esta acción, pese a ser ello ligado a la obligación contractual que surgió del pacto celebrado desde el 03 de mayo de 2012 (Pág. 29-33), por lo tanto, se torna en jurídicamente correcto su imposición, aunado a que la empleadora cometió actos que demuestran que su actuación laboral, al no cumplir sus obligaciones, no estuvo acompañada de razones atendibles, configurativas de buena fe, pudiendo desligarse de los múltiples requerimientos efectuados por el ente territorial demandante al gerente de la sociedad codemandada, que no existía motivo para generar esos incumplimientos en tanto se venía cumpliendo con las obligaciones correspondientes al pago por los servicios prestados por Brilladora Esmeralda en virtud del objeto contractual, lo que se hizo según la forma de pago establecida y el pliego de condiciones establecidos en el proceso de subasta (Págs. 223-236).

En virtud de ello, no es dable exonerar a la demandada de la satisfacción de esta obligación sancionatoria; sin embargo, atendiendo a que la apertura al proceso de liquidación de la sociedad, fue posterior a la data en que finalizó el contrato de trabajo, esto es, el 24 de febrero de 2014 (Pág. 22 Archivo 1) tal sanción debe limitarse a esta data, puesto que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha adocinado que durante el proceso de liquidación del empresario no es viable imponerla, pues *“de imponerle la indemnización moratoria a un empleador que se encuentra en esas condiciones, es decir en liquidación obligatoria, no tendría razón de ser la expedición de las leyes especiales que permiten la intervención Estatal en las*

empresas, las cuales están destinadas a proteger no solo el capital y la inversión económica, sino también los intereses de los asalariados y por ende el derecho Constitucional al empleo consagrado en el artículo 25 del Ordenamiento Superior, que se orienta a que un agente estatal dirija los destinos de la unidad de explotación económica y pretenda ya la recuperación económica, ora la liquidación de la sociedad" (ver sentencias SL2833 de 2017 y 20.764 del 10 de octubre de 2013); precedente que no es dable desconocer, dado que los casos resueltos presentan semejanza fáctica.

En ese orden, estando por fuera de discusión que el actor devengaba le salario mínimo para la fecha del fenecimiento del contrato que para 2013 era de \$589.500, el monto a reconocer por este concepto, el que se causa a razón de un día de salario por cada día de retardo, y que corre desde el 01 de febrero de 2013 y hasta el 24 de febrero de 2014 equivalente a 384 días, es en la suma de **\$7.545.600**.

La indemnización por despido sin justa causa

El actor advierte que la relación laboral que se encuentra debidamente probada, terminó por decisión unilateral y sin justa causa adoptada por quien fungió como parte patronal, por lo que en virtud a lo que contempla el artículo 167 del CGP, le correspondía probar tal supuesto de hecho para de ese modo, trasladar la carga de la prueba al convocado, a fin de corroborar que su determinación tuvo un sustento legal que lo exonere de esta indemnización.

En el plenario, no obra documental alguna que dé cuenta de ese finiquito, si bien las certificaciones laborales anexadas (Págs. 36-37 Archivo 1) muestran que esa vinculación se ejecutó hasta el 30 de enero de 2013, no se publican las causas que dieron origen a esa terminación; sin embargo, el testigo Camilo Alberto Arenas Arenas al respecto señaló que en efecto el fin del contrato se dio por decisión de Brilladora Esmeralda Ltda., informando ante la pregunta del apoderado: *Cómo fue la terminación de ese contrato que ustedes tenían con Brilladora?* que: *"nos enviaron una cartica a cada uno a la Institución, llegó una carta y uno por uno nos fueron llamando que había terminado el contrato con Brilladora Esmeralda"*, y aunque tal afirmación fue escueta y sin

narración del caso particular del actor, en el contexto de toda la declaración donde en las condiciones contractuales se refirió de forma específica a su contrato y al del señor Sierra Muñetón en las que había paridad de circunstancias por estar bajo igual vinculación, puede desprenderse que en esa terminación grupal que se aduce, estuvo incluido el demandante con quien el testigo compartía sede de labores, terminación unilateral que daba paso a la enjuiciada para demostrar que esa finalización tuvo por origen causas legales y justas que derruyeran la posibilidad de atribuir la indemnización respectiva, sin que se ese modo se haya procedido.

Bajo tal perspectiva, como quiera que la vinculación del actor bajo la modalidad de obra o labor indiscutida en esta instancia, estaba supeditada a la vigencia de los contratos por prestación de servicios celebrados entre las demandadas, mismos que según se extrae de su contenido, el primero - 2012SS150047- (Págs. 50-57 y 179-176 Archivo 1), contaba con un plazo desde la suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2012 y/o hasta agotar presupuesto, siendo modificada la fecha final al 28 de febrero de 2013 a partir de la modificación que se surtió el 25 de enero de 2012 (Págs. 219-220 Archivo 1), dándose la real terminación según se extrae de la “*audiencia de afectado*” (Págs. 96-107 Archivo 1), el 11 de febrero de 2013 una vez se agotó el presupuesto, lo que dio lugar al segundo contrato -2013SS150025- celebrado el 13 de febrero de 2013 (Págs. 58-64 y 171-177 archivo 1) en el que se pactó un plazo de 3 meses, que finalizaría el 13 de mayo de 2013, por lo que no existiendo motivaciones expuestas para consumir las labores de aseo y mantenimiento ejecutadas por el demandante previo a la conclusión definitiva de los contratos por servicios vigentes para la data del despido entre Brilladora Esmeralda Ltda. y el Departamento de Antioquia, es que la indemnización que regula el artículo 64 del CST es atinado concederla, la que atendiendo a los 43 días que restaban por cumplir debe reconocerse en la suma de **\$844.950**.

Dotación de vestido y calzado de labor

Sobre la dotación, en efecto, su suministro contemplado por los artículos 230 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, con las modificaciones introducidas por la Ley 11 de 1984, es una obligación a cargo del empleador,

cuyo objeto es que el trabajador la use en las labores contratadas, debiendo precisarse que no está previsto el mecanismo de la compensación en dinero, por el contrario, el legislador lo prohibió en forma expresa y terminante en el artículo 234 del Código Sustantivo.

Sin embargo, sobre el patrono que haya negado el suministro en vigencia del vínculo laboral, ha de aplicarse la regla general en materia contractual de que el incumplimiento de lo pactado genera el derecho a la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y en favor de la afectada, la cual como no se halla legalmente tarifada ha de establecerla el juez en cada caso (Ver SL3990-2020).

Bajo tal concepto, como es evidente que el propósito de la dotación no es otro que la utilización del trabajador de ese vestido y calzado en función de sus labores, no se hace posible por acatamiento a la ley su reconocimiento o compensación en dinero como se pretende por la activa, y menos, cuando ha fenecido el contrato de trabajo, pues ello solo se traduciría en los mentados perjuicios que en este trámite judicial no fueron demostrados y por tanto no se hace plausible su reconocimiento.

Indexación

En relación a la indexación de las condenas impuestas, correspondiente a salarios y prestaciones sociales, como otro punto apelado por la activa, se tiene que es dable ordenarse el ajuste monetario, desde el 25 de febrero de 2014, por cuanto se dispuso la sanción moratoria sobre estas acreencias, hasta el 24 de febrero de 2014, pero, no puede perderse de vista que a partir de dicha fecha aquellas sumas adeudadas siguen perdiendo su valor real, luego en aras del restablecimiento del poder adquisitivo, es dable ordenar su actualización. Lo mismo ocurre con las vacaciones y la indemnización por despido cuantías que también se deberán indexar al momento de su pago.

La solidaridad del Departamento de Antioquia

A este punto debe determinarse si tiene cabida la extensión de las condenas al Departamento de Antioquia que surgieron como consecuencia del vínculo laboral no discutido en esta sede, puesto que la activa no controvierte la modalidad contractual de obra o labor declarada en primera instancia, ni quién fungió como su subordinante, encontrando que la responsabilidad a cuya asignación se aspira respecto del Departamento convocado, es en calidad de beneficiario del servicio, es decir, como solidario.

Al respecto, se tiene que el artículo 34 del CST prevé esa solidaridad en el siguiente sentido: *“1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores”*(Subrayas por fuera de texto).

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”.

Sobre este punto, se ha explicado desde sentencia del 2 de junio de 2009, radicado 33082, reiterada en la SL377-2021, que *“lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o*

negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”.

En relación con la prestación del servicio público de la educación, la Ley 715 de 2001 en desarrollo de los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, en su artículo 6º le asigna a los departamentos la prestación de asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios para la eficiente prestación de dicho servicio público, que a su vez se constituye en un derecho fundamental (artículo 67 CP). Igualmente, respecto de los municipios no certificados, el numeral 6.2.4 del citado artículo del estatuto en mención, radica en cabeza de los entes territoriales la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, haciéndole cargo de los proyectos educativos, pero también de *“las inversiones de infraestructura, calidad y dotación”*.

De lo anterior es dable desprender que los servicios entregados por el ex trabajador como auxiliar de servicios generales de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta tal y como lo certificó esta institución (Pág. 37 Archivo 1), deben ser suministrados como una obligación constante a cargo del Departamento de Antioquia, por tratarse de un plantel no certificado, luego, en atención a lo previsto en los artículos 298 de la Constitución Política, y 6º de la Ley 715 de 2001, según los cuales compete y es responsabilidad de las entidades territoriales, como la pasiva, la promoción del desarrollo social y educativo en su jurisdicción, y organizar la prestación y administración del servicio educativo, debe entenderse como parte de su responsabilidad, la provisión del aseo y mantenimiento en las instalaciones donde dicho servicio sea prestado, pues de su inclusión deriva la eficacia del primero, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional (Sentencias T-516 de 1996 y T-273 de 2014).

De ese modo, se encuentra una relación de causalidad entre la obra o labor contratada con la codemandada empleadora y el giro ordinario de las

actividades del Departamento de Antioquia, pues claramente las labores encomendadas al actor no pueden entenderse extrañas al objeto misional del ente gubernamental, por lo que, ajenos a que el Departamento de Antioquia hubiese acreditado o no el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato celebrado con el contratista Brilladora Esmeralda Ltda., para cuya ejecución fue vinculado el demandante, no se releva de la responsabilidad solidaria que por disposición legal se colige frente a los salarios y prestaciones sociales a los que hubiera lugar, como tampoco de las indemnizaciones que de dicha omisión se derivan como beneficiario de la labor.

Valga decir que la responsabilidad solidaria que el artículo 34 impone al beneficiario del trabajo o al dueño de la obra, no excluye esta indemnización moratoria, pues en voces de la alta Corporación la correcta intelección del artículo 65 del CST está referida a que, *“sí bien esta tiene un carácter sancionatorio, no por ello deja de ser una indemnización para los fines de la responsabilidad solidaria, pues es un derecho que surge y tiene su causa en el contrato de trabajo y, precisamente, la solidaridad legal que se impone como una medida de protección para los asalariados, busca en últimas amparar los derechos derivados de ese contrato y evitar así que, a través de figuras jurídicas, tales derechos sean menoscabados o desconocidos”* (CSJ SL, febrero 21 de 2006, rad. 24495 reiterada en la SL5275-2021).

En suma, la decisión objeto de apelación habrá de ser revocada en cuanto declaró probada la excepción de prescripción sobre todos los conceptos que integraron las pretensiones de la demanda para en su lugar, ordenar el reconocimiento y pago a las demandadas de manera solidaria de las prestaciones sociales (cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicios), las vacaciones, el auxilio de transporte, la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, la indemnización por despido sin justa causa y la indexación en los términos antedichos, desechando el reconocimiento de la compensación por dotación.

Finalmente, por salir adelante las posibilidades planteadas en el recurso de apelación de la activa, en ambas instancias las costas estarán a cargo de la parte vencida en juicio integrada por Brilladora Esmeralda Ltda. y el

Departamento de Antioquia, fijando las agencias en derecho en \$600.000 a cargo de cada una.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA parcialmente** la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocidas, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción. En su lugar, **DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN**, en los términos y condiciones explicados en la parte motiva. Se **CONDENA** a **BRILLADORA ESMERALDA LTDA** (hoy liquidada) y al **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** como deudor solidario, al reconocimiento y pago de las siguientes acreencias laborales e indemnizatorias:

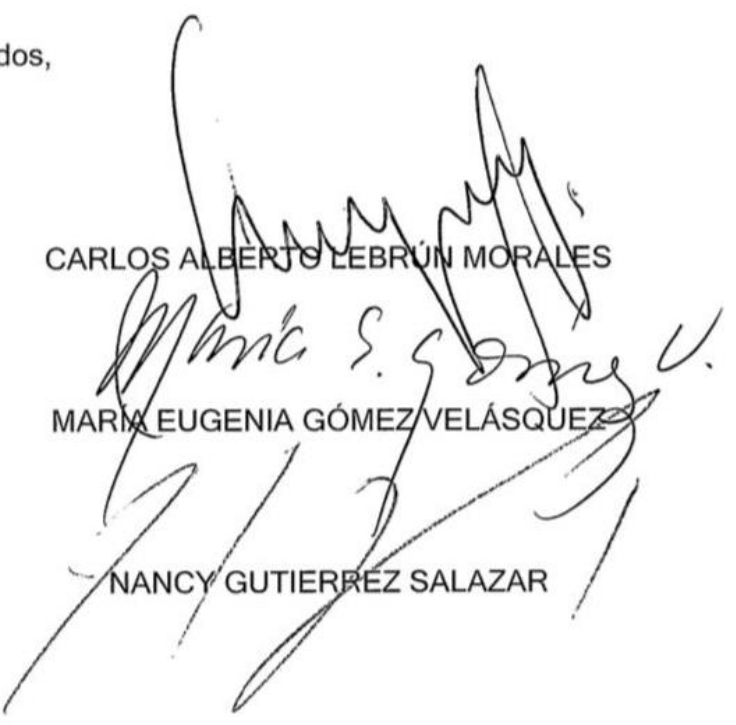
- Auxilio de transporte: \$608.380
- Cesantías: \$474.475.
- Intereses a la cesantía: \$33.319.
- Prima de servicios: \$474.475
- Vacaciones: \$211.889 indexada al momento del pago.
- Sanción moratoria por el no pago de prestaciones: \$7.545.600, indexada a partir del 25 de febrero de 2014 y hasta su pago.
- Indemnización por despido sin justa causa: \$844.950 indexada al momento de su satisfacción.

Se **ABSUELVE** del reconocimiento de la compensación por dotación por las razones anotadas en la parte motiva. Y **CONFIRMA** en lo demás.

Las costas en ambas instancias son a cargo de ambas demandadas, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$600.000 a cargo de cada una y en favor del demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05088310500120160035601
Proceso: Ordinario
Demandante: CARLOS HUMBERTO SIERRA MUÑETON
Demandado: BRILLADORA ESMERALDA LTDA EN LIQUIDACION
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 24/11/2022
Decisión: CONFIRMA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 25/11/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario